

Los herederos del franquismo

Hoy podrá saberse quiénes son los que quieren heredar al franquismo con "ascensores funcionando", y quiénes, por el contrario, quieren desmontar de una vez por todas el aparato estatal de la dictadura más duradera de Occidente. Cuando el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, defiende ante las Cortes su proyecto de reforma fiscal, los candidatos a heredar el franquismo no le van a pedir cuentas de lo que pretende hacer con esa cifra astronómica de casi dos billones de pesetas que, Seguridad Social incluida, pretende gastarse este año el Estado franquista que padecemos. No le preguntarán tampoco si de la crisis económica actual no puede salirse más fácilmente aplicando una reducida austeridad al despilfarro del Estado nacional sindicalista, en lugar de cargar todo el peso de la crisis sobre un aumento de impuestos y un apretarse el cinturón de los de siempre. Un 10 por 100 de ahorro de los gastos del Estado significaría doscientos mil millones de pesetas, mientras que la recaudación prevista con los nuevos impuestos apenas excede de los veintidós mil. La reforma fiscal es, ciertamente, un problema de justicia que no admite espera, pero contener el despilfarro de ese monstruoso Estado que sobre nosotros pesa es, además de un problema de justicia que clama al cielo, un problema de libertad ciudadana y un problema de eficacia económica.

Quiénes escamotean hoy el tema fundamental de que este aparato estatal ha vivido durante cuarenta años sin control ninguno de gastos, quienes no exijan una inmediata investigación parlamentaria sobre los derroches de nuestra monstruosa Seguridad Social, quienes traten de olvidar que decenas de miles de funcionarios de los Ministerios franquistas hoy desguazados —Movimientos, Sindicatos e Información— siguen cobrando sus sueldos sin hacer nada de nada, quienes olviden el escandaloso despilfarro de la televisión estatal que nos cuesta la blasfema cifra de cuatro mil millones de pesetas al año en subvenciones, quienes no recuerden que toda peseta que derroche el Estado es una peseta sacada en una gran proporción a la clase obrera española cuando compra un lapicero o un kilo de patatas, estarán siendo cómplices de una operación escandalosa de escamoteo que pretende dejar intocado el aparato estatal de la dictadura.

Ha llegado ya la hora de que el Parlamento español tome tierra y tome contacto con los problemas reales. Y el problema más real, el problema que dio origen en Occidente al nacimiento de Cortes y Parlamentos, es el problema de los impuestos y el control de lo que se hace con esos impuestos. Quiénes olviden hoy que toda peseta que gasta el Estado es una peseta obtenida sobre las espaldas del trabajo nacional, son cómplices de una conspiración para heredar el franquismo sin tocarlo.

Las elecciones se han hecho para que ciudadanos responsables defiendan desde el Parlamento los derechos, el trabajo y los dineros de los ciudadanos. No se hicieron las elecciones simplemente para que grupos políticos distintos al moribundo Movimiento Nacional tuvieran la posibilidad de hacer oír su voz por hacer oír su voz y acceder al Gobierno por acceder al Gobierno. Los parlamentarios están ahí para representarnos, para luchar por la justicia y para defender la libertad. La justicia concreta, los derechos concretos, y la libertad concreta de cada ciudadano.

Y la primera exigencia de los ciudadanos en estos momentos de grave crisis nacional es impedir que el Estado descargue sobre sus sufridas espaldas todo el peso de la crisis, mientras que en el Olimpo de la Administración nacional-sindicalista se sigue viviendo con la prodigalidad y derroche que alcanzó cimas asiáticas tras cuarenta años de opresión y descontrol.